

ESTRUCTURA SOCIAL DE ARGENTINA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

2

Pablo Dalle (compilador)

Respuestas estatales,
experiencias de
trabajadoras/es y
estrategias colectivas
de resistencia en tres
sectores estratégicos

ediciones
**IMAGO
MUNDI**


IIGG
GINO GERMANI

AGENCIA
NACIONAL DE PROMOCION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA


Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia

VOLUMEN 2

Pablo Dalle (compilador)

Cora Arias, Pablo Barbetti, Liliana Bergesio, Gastón Bordarampé, Brenda Brown, Mariana Busso, Pablo Dalle, Álvaro Del Águila, Nicolás Diana Menéndez, Sergio Emiliozzi, María Inés Fernández Álvarez, Lucio Fernández Mouján, Alina Gispert, Federico González, Natividad González, Julieta Haidar, Denise Kasparian, Ignacio Kesque Hreňuk, Eugenia Labrunée, María Paz Laurens, Ernesto Mate, Gabriela Merlinsky, Cinthia Naranjo, Ana Natalucci, Florencia Nieva, Valeria Ojeda, Héctor Palomino, Evangelina Patagua, Guiomar Sakamoto, Gabriela Sala, Mariana Schmidt, Camila Stefanetti, Agustina Súnico, Melina Tobias, Andrea Torricella, Fernando Toyos, Martín Unzué, Agustina Zeitlin, Carla Zibecchi y Sabrina Zinger.

Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia

VOLUMEN 2

Respuestas estatales, experiencias
de trabajadoras/es y estrategias colectivas
de resistencia en tres sectores estratégicos

ediciones
**IMAGO
MUNDI**

Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia, vol. 2:
Respuestas estatales, experiencias de trabajadoras/es y estrategias
colectivas de resistencia en tres sectores estratégicos. 1a ed. Buenos
Aires: 2022

428 p.; 15.5x23 cm.

ISBN de la obra: 978-950-793-409-4

ISBN del volumen 2: 978-950-793-412-4

1. Análisis Sociológico. I. Dalle, Pablo, comp.

CDD 303.480982

Fecha de catalogación: 05/10/2022

© 2022, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

© 2022, Ediciones Imago Mundi

Diseño de tapa: Diana Cricelli

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Los capítulos del presente libro fueron sometidos a un proceso de
evaluación interna entre investigadores de la red.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta,
puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna
ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de
grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.
Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2022
en San Carlos Impresiones, Virrey Liniers 2203, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
IIGG | GINO
GERMANI
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Director del Instituto

Dr. Martín Unzué

Comité Académico 2021-2023

Claustro de Investigadores

TITULARES

Dr. Pablo Dalle

Dra. Ana Clara Camarotti

Dra. María Carla Rodríguez

Dr. Jorge Daniel Castro Rubel

SUPLENTES

Dra. María Gabriela D'Odorico

Dr. Ricardo Jesús Laleff Ilieff

Dra. Analía Inés Meo

Dr. Marcelo Raffin

Claustro de Auxiliares

TITULARES

Mg. Rosana Abrutzky

SUPLENTES

Mg. Vanina Inés Simone

Claustro de Becarios

TITULARES

Dr. Martín Hernán Di Marco

Lic. María Victoria Imperatore

Lic. Agustina Trajtemberg

SUPLENTES

Lic. Sebastián Lemos

Lic. Mirna Lucaccini

Lic. Luca Zaidan

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Universidad de Buenos Aires

Pte. J. E. Uriburu 950, 6to

(C1114AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<http://www.iigg.sociales.uba.ar>

PESUP/IIGG/UBA Programa de Estudios Sobre Universidad Pública

<http://pesupiigg.sociales.uba.ar>



Agencia I+D+i

Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Presidente del Directorio

Lic. Fernando Peirano

Sumario

El diseño teórico-metodológico del proyecto PIRC-ESA. El análisis de la estructura social para repensar las políticas de desarrollo en Argentina. Pablo Dalle	XIII
1 Héctor Palomino y Pablo Dalle	
Trabajadores en la salida de la pandemia: convergencia a partir de la diversidad	1
1.1 Introducción	1
1.2 Composición y localización de los trabajadores en la estructura social: enumeración de las principales tendencias	2
1.3 Movilización colectiva	7
1.4 Desigualdades de ingresos y condiciones de vida	15
1.5 Cambios en el rol del Estado	21
1.6 La crisis como oportunidad. Repensar el desarrollo	22
1.7 Principales conclusiones	25
Parte 1 Economía popular	
2 Mariana Busso, Federico M. González y Brenda Brown	
La economía popular como actor económico. La construcción de su identidad colectiva en tiempos de pandemia	31
2.1 Introducción	31
2.2 La economía popular: una identidad colectiva en construcción	33
2.3 La economía popular en pandemia: ¿referenciales identitarios en tensión?.	38
2.4 Conclusiones	54
3 Carla Zibecchi y Pablo Barbetti	
Procesos de institucionalización de la economía social y popular. Respuestas estatales y estrategias de reconversión en el contexto de pandemia	61
3.1 Introducción	61
3.2 Aproximaciones en torno a la EP: la mirada de sus referentes	64
3.3 Impactos de la pandemia en la EP y estrategias de reconversión y adaptación.	68

3.4	Respuestas emergentes y transformaciones estatales	72
3.5	Reflexiones y aportes para una agenda en construcción	82
4	Natividad González, Florencia Nieva y Liliana Bergesio Las voces de la economía popular: problemáticas en pandemia y desafíos ante el Estado	91
4.1	Introducción	91
4.2	Metodología	93
4.3	Caracterización del sector y sus actores	95
4.4	Problemáticas en pandemia	97
4.5	Iniciativas en pandemia	100
4.6	Aprendizajes y desafíos.	103
4.7	Relación con el Estado	104
4.8	Comentarios finales	108
5	María Inés Fernández Álvarez, María Paz Laurens y Camila Stefanetti Sostener la vida: las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular más acá y más allá de la pandemia del COVID-19	113
5.1	Introducción	113
5.2	(Re)inventarse para ganarse la vida	119
5.3	Cuidar(se) y cuidar de otros y otras	122
5.4	A modo de cierre	128
6	Ana Natalucci, Lucio Fernández Mouján y Ernesto Mate La intervención del Estado frente la crisis de COVID-19 para el sector de la economía popular (AMBA, 2020-2021)	137
6.1	Introducción	137
6.2	Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular	140
6.3	La intervención del Estado durante la pandemia	141
6.4	Demandas y percepciones sobre la intervención estatal.	154
6.5	Palabras finales	157
7	Denise Kasparian, Agustina Súnico y Cinthia Naranjo Estrategias, demandas y desafíos de las empresas recuperadas frente a la pandemia del COVID-19	163
7.1	Introducción	163
7.2	Estrategia metodológica	165
7.3	Situación socioeconómica y principales problemáticas	167
7.4	Estrategias productivas y asociativas frente al COVID-19	172
7.5	Demandas al Estado y planteo de políticas públicas	178
7.6	Conclusiones	181
8	María Eugenia Labrunée y Alina Gispert Estrategias colectivas e individuales en la economía popular. La recuperación de materiales en vía pública en Mar del Plata.	187
8.1	Introducción	187

8.2	La economía popular, una forma de resistencia frente a los procesos de exclusión	189
8.3	La economía popular en Argentina.	191
8.4	La actividad de recupero de materiales urbanos en Argentina	193
8.5	La recuperación de materiales en Mar del Plata. Características y condiciones de trabajo en la prepandemia	195
8.6	Procesos de trabajo colectivo para la recuperación de materiales en vía pública en Mar del Plata	201
8.7	El impacto de la pandemia para los y las recuperadoras urbanas	203
8.8	Estrategias de organización del trabajo a partir de la pandemia desde la cooperativa RUM	204
8.9	Reflexiones acerca de la potencialidad de la economía popular para acompañar la recuperación económica en la pospandemia	206
9	V. Ojeda, S. Zinger, J. Kesque Hreñuk, E. Patagua y G. Sakamoto La esencialidad de y en la economía popular. Organizaciones, estrategias y dinámica de las relaciones mediatizadas por el trabajo en tiempos de pandemia en Chaco, Corrientes y Jujuy	215
9.1	Introducción	215
9.2	Matrices productivas, trabajo y economía popular	218
9.3	Construcción de «otras» esencialidades	229
9.4	Reflexiones finales	243
Parte 2 Universidades y sistema científico-tecnológico		
10	Martín Unzué, Sergio Emiliozzi, Agustina Zeitlin y Liliana Bergesio Cambios, reorganizaciones y mutaciones en el trabajo productivo ante la pandemia de COVID-19. Su impacto en organismos científicos y tecnológicos y universidades de Argentina	253
10.1	Introducción	253
10.2	La situación en los organismos científicos-tecnológicos	256
10.3	Las Universidades desde las voces de sus autoridades	261
10.4	Las voces de los representantes gremiales	264
10.5	Las voces de los/as trabajadores/as	268
10.6	Conclusiones	271
11	Andrea Torricella y Fernando Toyos Trabajar en casa, el trabajo de la casa y el trabajo de cuidados en tiempos de pandemia de COVID-19: articulaciones, conflictos y estrategias del sector ciencia y universidad	277
11.1	Impacto de la pandemia y las medidas implementadas a partir de ella en el ámbito doméstico, familiar y personal	280
11.2	Estrategias individuales, colectivas e institucionales en torno a la articulación de trabajo, espacio doméstico y trabajo de cuidado	288

11.3	Diagnóstico y balance	294
Parte 3 Logística, construcción e infraestructura		
12	Julieta Haidar y Gastón Bordarampé La logística de última milla: impactos de la pandemia en las plataformas de reparto en Argentina	299
12.1	Introducción	299
12.2	El trabajo en las plataformas de reparto	302
12.3	El mercado gastronómico y las plataformas de reparto	306
12.4	Reflexiones finales	312
13	Nicolás Diana Menéndez y Cora C. Arias Las plataformas de reparto en Argentina durante la pandemia: experiencias de organización colectiva e iniciativas de regulación	317
13.1	Introducción	317
13.2	Conflictividad laboral en las plataformas de reparto durante la pandemia.	319
13.3	Iniciativas de regulación en la Argentina reciente	330
13.4	Comentarios finales	339
14	Gabriela Sala y Álvaro Del Águila Después del temporal. Ocupaciones de la construcción hacia el final del ASPO	345
14.1	Introducción	345
14.2	Cambios en la estructura de edades	346
14.3	La diversidad del universo de la construcción	348
14.4	Los ocupados en la construcción en 2020 y 2021	351
14.5	Informalidad y cuentapropismo	351
14.6	El perfil de la informalidad según edad	355
14.7	El impacto de las ASPO.	358
14.8	La doble crisis desde la perspectiva de los actores.	361
14.9	Reflexiones finales	365
15	Mariana Schmidt, Melina Tobías y Gabriela Merlinsky Infraestructura hídrica y desigualdades sociales en el marco de la pandemia: barrios populares del Gran Buenos Aires y zonas rurales y periurbanas del Chaco salteño.	371
15.1	Introducción	371
15.2	Desigualdades hídricas en el contexto del COVID-19	374
15.3	Políticas y programas de infraestructura hídrica en el marco del COVID-19	380
15.4	Reflexiones finales	393

CAPÍTULO 15

Infraestructura hídrica y desigualdades sociales en el marco de la pandemia: barrios populares del Gran Buenos Aires y zonas rurales y periurbanas del Chaco salteño

MARIANA SCHMIDT,^{*} MELINA TOBÍAS^{**} y GABRIELA MERLINSKY^{***}

15.1 Introducción

El presente artículo se propone centrar la mirada en la infraestructura hídrica y los efectos que esta tiene en la producción y reproducción de desigualdades socioespaciales, sanitarias y ambientales, en el marco de la emergencia y expansión del virus COVID-19. En Argentina, la pandemia profundizó y visibilizó la crítica situación sanitaria que históricamente presentan las áreas urbanas y rurales, sin cobertura formal de redes de servicio de agua potable y saneamiento, expuestas a diversos tipos de contaminación y degradación ambiental y con limitaciones de acceso a los sistemas de salud. Las empresas prestadoras de agua potable suelen abastecer radios urbanos consolidados mientras que, en las zonas rurales y periurbanas, priman las formas alternativas a la red. En estos casos, la seguridad y calidad del agua no está garantizada, y se torna muy difícil asegurar las condiciones mínimas de higiene que exigen las medidas sanitarias de prevención.

* Investigadora del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

** Investigadora del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

*** Investigadora del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

En las ciudades, la expansión de la trama urbana dio lugar a la conformación de territorios segregados con áreas consolidadas e integradas donde residen los sectores de clases altas y medias, y otras excluidas y marginadas donde viven los sectores más vulnerables, mayormente ubicadas en zonas periféricas, degradadas ambientalmente, próximas a industrias, basurales o cuencas hídricas contaminadas. En estos territorios, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad, que se reflejan en la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable – tanto en cantidad como en calidad –, precarios materiales de construcción de las viviendas y elevados niveles de hacinamiento crítico de los hogares, se traducen en determinantes sociales de la salud, ya que incrementan la exposición a riesgos sanitarios y ambientales de los sectores más vulnerables.

Los hogares sin agua potable deben proveerse del servicio a través de fuentes alternativas, ya sea de manera autogestionada (mangueras conectadas a redes formales periféricas o a pozos de extracción), acarreo y acopio de agua, o bien a través de la compra de agua envasada; todas opciones que se encuentran al margen de las regulaciones públicas. A su vez, las poblaciones más expuestas a estos problemas y enfermedades son quienes más difícilmente acceden a los sistemas y monitoreos de salud, agravando así los niveles de desigualdad social.

La falta de redes de servicio de agua y cloaca no solo afecta a la población de villas y asentamientos, sino también a quienes residen en áreas periurbanas y rurales, donde la baja densidad poblacional y su alta dispersión territorial encarecen y dificultan la cobertura por medio de redes. También allí la población (en gran medida perteneciente a familias campesinas, comunidades indígenas o de pequeñas localidades y parajes) debe apelar a fuentes alternativas de servicio, con el agravante de que, en muchos casos, las fuentes de agua subterránea se encuentran contaminadas por factores antrópicos, como son los agroquímicos; o bien naturales, como el arsénico. En estos casos, el principal problema no es solo la exposición a mayores riesgos asociados a la contaminación del agua, sino la falta de información epidemiológica sobre las enfermedades que afectan a estos grupos sociales, lo que evidencia los límites del sistema de salud, y del Estado en general, para llegar a estos territorios.

Para atender a los objetivos del artículo, retomamos los trabajos provenientes de la antropología de las infraestructuras, que proponen analizarlas no solo como el soporte material que permite el desarrollo de las relaciones sociales, sino más bien como objetos de estudio que expresan y a la vez condicionan el modo que asumen dichas relaciones (Bowker 1994). Esto supone entender la dimensión simbólica y política – además de la material – que tienen las infraestructuras (Larkin 2013). Partir de estos preceptos permite centrar la atención en los efectos que tienen las infraestructuras en la vida

cotidiana, especialmente en áreas periféricas donde la existencia y la calidad (en términos de mantenimiento y adaptación a necesidades locales) de las redes de servicio no se encuentran garantizadas. Esto lleva a que dichas infraestructuras asuman el primer plano, siendo una preocupación básica y vital para la población que allí reside (Anand 2017). De este modo, abordar las infraestructuras permite ampliar el análisis de la gobernabilidad del agua, así como también de las desigualdades hídricas, que incluyen los problemas asociados a su calidad, mantenimiento y al involucramiento de la población objetivo dentro de su diseño (Schmidt y Tobías 2021).

La hipótesis de trabajo es que, si bien las infraestructuras del agua adquirieron fuerza en el contexto pandémico, de la mano de diversos actores estatales y no estatales que asumen competencias y destinan inversiones en obras, las fallas en el diseño o en las soluciones a aplicar, la falta de control, regulación y mantenimiento de las mismas y/o la ausencia de mecanismos participativos que contemplen las prácticas y usos comunitarios del agua, lleva a que estas materialidades no logren cumplir el objetivo de la accesibilidad en el largo plazo ni revertir las desigualdades históricas. Concretamente, analizamos el modo en que la expansión del COVID-19 en el país ha profundizado desigualdades preexistentes en relación al acceso al agua y saneamiento, en especial en los sectores sociales más vulnerables. Ante este escenario crítico, nos interesa explorar las intervenciones estatales destinadas a la construcción y ampliación de infraestructura hídrica con el fin de garantizar una mejora en la calidad de vida de estas poblaciones. Por último, nos proponemos reflexionar sobre cómo se plasmaron esas obras públicas en territorios concretos y en qué medida dichas iniciativas permitieron dinamizar el mercado laboral.

Para responder a los objetivos planteados, nos centramos en dos casos de estudio. Por un lado, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que desde inicios del 2020 concentró la mayor cantidad de contagios de COVID-19 del país, y donde en los últimos años hemos desarrollado investigaciones sobre la degradación ambiental y los efectos en la salud de la población vulnerable que reside en villas y asentamientos (Merlinsky y Tobías 2020; Tobías *et al.* 2020; Tobías y Fernández Bouzo 2022). Por otro lado, en la provincia de Salta, particularmente en los departamentos pertenecientes al Chaco salteño, donde hemos desarrollado proyectos sobre las consecuencias ambientales y sanitarias del uso de agroquímicos, la pérdida de bosques nativos y los problemas de acceso al agua (Schmidt 2019, 2022; Schmidt *et al.* sin fecha; Schmidt y Tobías 2021). La estrategia metodológica combina el análisis de entrevistas en profundidad realizadas en el marco del proyecto «Programa de Investigación Regional Comparativa: Cambios recientes en la estructura social argentina:

trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y pospandemia» (PIRC-ESA)^[1] y entrevistas provenientes de otras investigaciones que aportan al tema en cuestión, junto con el relevamiento y sistematización de fuentes secundarias (informes oficiales, estadísticas, cartografías, notas periodísticas y/o documentales).

El trabajo se organiza en tres apartados, además de esta introducción. En el primero, nos centramos en analizar la distribución desigual de la cobertura formal de agua potable y saneamiento (especialmente en áreas vulnerables como son los barrios populares y las áreas periurbanas y rurales), a partir de los casos de estudio señalados. En el segundo apartado, focalizamos en algunos de los principales proyectos de obra pública asociados a la infraestructura hídrica. Nos interesa dar cuenta de las políticas y programas que se emprendieron a nivel nacional durante el período 2020-2022 para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrentan las áreas más postergadas en materia de accesibilidad a servicios de redes de agua y saneamiento. En este último punto, ahondamos en el modo en que estas intervenciones han impactado en la dinamización del mercado laboral, a través de la contratación (bajo diversas modalidades) de mano de obra local y/o regional. Por último, presentamos las reflexiones finales del capítulo, a la luz del recorrido trazado.

15.2 Desigualdades hídricas en el contexto del COVID-19

En el presente apartado analizamos la distribución desigual de la cobertura formal de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas vulnerables como son los barrios populares y las áreas periurbanas y rurales. Nos centramos en los casos del AMBA y el Chaco salteño, repasando allí el modo en que históricamente se han ido consolidando inequidades en relación a la accesibilidad al servicio y en cómo estas desigualdades se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Si bien las regiones seleccionadas poseen amplias diferencias entre sí, entendemos que representan escenarios críticos a la hora de pensar la emergencia y difusión de ciertas enfermedades y el acceso a la salud por parte de sus habitantes. Si en el AMBA es la alta densidad poblacional la que favoreció los contagios (especialmente en poblaciones sin acceso a servicios sanitarios), en el Chaco salteño es la intensidad de las transformaciones ambientales y territoriales recientes lo que agrava el cuadro epidemiológico en poblaciones con precarias condiciones de acceso a la infraestructura en salud y al agua para consumo humano.

[1] Estas entrevistas se enmarcan en el trabajo del subgrupo que analizó el eje construcción e infraestructura como sectores particularmente afectados por la pandemia y relevantes en la recuperación pospandemia.

15.2.1 El caso del AMBA y la consolidación de una urbanización sin servicios

Comúnmente el AMBA es entendido como el territorio que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 24 municipios del Gran Buenos Aires (provincia de Buenos Aires) que la rodean. No obstante, según los anuncios oficiales, basado a su vez en la segmentación de regiones sanitarias que establece el Ministerio de Salud de la Nación a partir del COVID-19, el AMBA comprende un territorio más amplio comprendido por la Ciudad Autónoma y 40 municipios de la provincia. Esta última definición responde a la noción de Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), representando el crecimiento de la mancha urbana. En este territorio habitan más de 15 millones de personas, más del 37 % de la población del país en un espacio menor al 1 % del territorio nacional. Por su parte, los partidos de la RMBA (40 municipios) aglutinan el 80 % del total de la población de la provincia en algo menos del 4 % del territorio provincial.

Al analizar las transformaciones recientes en el AMBA, se observa que el riesgo ambiental aumentó con el crecimiento no planificado, profundizado en los años 1990 con las denominadas nuevas formas urbanas o urbanizaciones cerradas. Como contracara a este modelo de expansión de baja densidad para sectores ricos, la dificultad de acceso al hábitat por parte de los grupos de menores recursos llevó al crecimiento de las villas y asentamientos y a la creación de complejos de vivienda social dispersos en la periferia. La pobreza urbana se concentró en las zonas más degradadas en términos ambientales: cuencas hídricas contaminadas, basurales, zonas inundables (Tobías y Fernández Bouzo 2022).

En lo que refiere a la provisión de infraestructura hídrica, el desfasaje entre el crecimiento de la ciudad y la expansión de las redes en agua evidenció las propias limitaciones de un sistema sociotécnico complejo, como es el de agua potable y saneamiento, regido a través de un modelo organizado de manera centralizada – esto quiere decir, fomentando la expansión del centro hacia la periferia – y con limitaciones para flexibilizar el servicio hacia las zonas más alejadas. El desarrollo y la evolución de dicho sistema ha configurado un territorio desequilibrado y desigual, con permanente tensión entre áreas conectadas e incluidas en la ciudad y otras desconectadas y excluidas en el conurbano.

Este desajuste se inició en los años 1940 y se vio agravado con el pasar del tiempo. Por un lado, por el desfinanciamiento que tuvo el servicio y el retraso en la expansión de las redes con relación a la velocidad que adquirió la urbanización en la región y, por el otro, por la lógica mercantil que primó durante la privatización en el período

1993-2006, que profundizó las desigualdades socioterritoriales en relación al servicio, priorizando la expansión de las redes. Durante este período, el incremento en reiteradas ocasiones de los costos fijos de la tarifa y la priorización de expansión en zonas de mayor capacidad económica, ampliaron la exclusión económica y territorial a partir de una lógica de mercantilización en un servicio básico como es el agua potable y las cloacas (Tobías 2014).

Si bien a nivel de la región metropolitana, la cobertura de servicio de agua se acerca al 78 %, este valor no es homogéneo para la totalidad de partidos ni grupos sociales. Según los datos actualizados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), existen 5.687 barrios populares a nivel nacional (esto comprende villas, asentamientos y complejos habitacionales construidos en el marco de políticas de acceso al hábitat),^[2] y más del 30 % se ubica en el AMBA. En estos barrios la accesibilidad a servicios de red de agua y cloaca es limitada, e incluso en caso de existir las redes formales, generalmente estas presentan problemas de mantenimiento y baja presión de agua, lo que repercute en la calidad de los servicios.

Del total de barrios populares relevados a nivel nacional, el 96 % carece de acceso a redes de agua potable, más del 98 % a redes de cloaca, el 63,8 % no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9 % no accede a la red formal de gas natural (TECHO 2016). Esto supone que las poblaciones que allí residen deben apelar a formas alternativas de provisión, ya sea, en el caso del agua, conformando redes propias «pinchadas» a la red troncal de la empresa prestadora de servicio (eso siempre y cuando el barrio esté próximo al área servida de la empresa), o bien a través de perforaciones subterráneas con bomba manual o a motor.^[3] También otras alternativas utilizadas son el acarreo del agua y su almacenamiento en tanques o bidones (lo que incrementa el riesgo de otras enfermedades como el dengue), o incluso la compra de agua embotellada. En el caso de la falta de cloacas, el sistema alternativo más empleado es el pozo ciego y, en algunos casos, la cámara séptica, dependiendo de los recursos económicos que disponga el hogar. Además de los barrios populares, el déficit de redes de agua y saneamiento también afecta a las poblaciones que residen en los partidos más periféricos del área metropolitana (véase figura 15.2). Esta situación se agrava al advertir

[2] <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-amplio-el-registro-nacional-de-barrios-populares>.

[3] En el área del AMBA existen dos principales acuíferos: el Pampeano, que es el más superficial y el más contaminado; y el Puelche, que se encuentra a mayor profundidad, entre 40 y 70 m dependiendo la zona, y que aún contiene agua de calidad para su consumo, aunque los riesgos de contaminación son cada vez más elevados.

que son estos partidos periurbanos, los que mayor crecimiento han adquirido en las últimas décadas (Tobías y Fernández 2019).

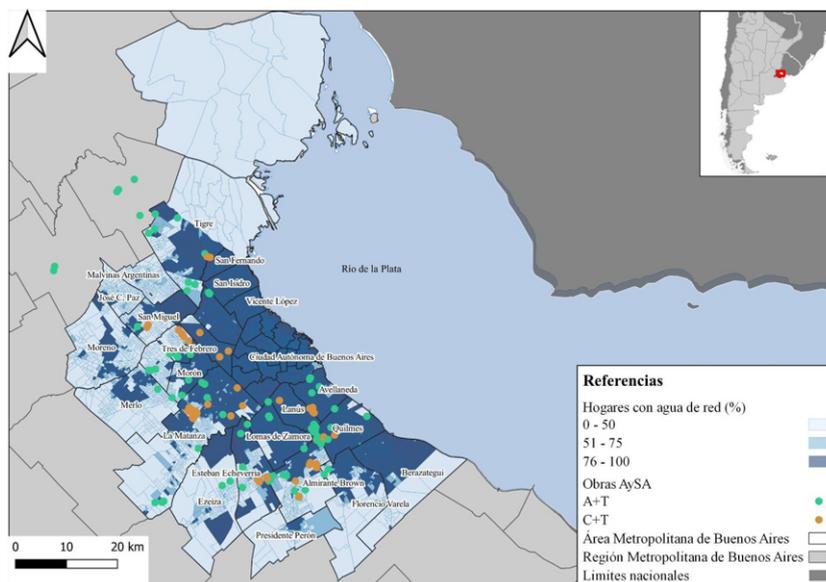


Figura 15.1. Planes Agua+Trabajo / Cloaca+Trabajo y nivel de cobertura de agua potable en hogares (%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia con base en INDEC (2010) y Datos abiertos obras AySA (<https://obras.aysa.com.ar>).

En este contexto, la llegada del COVID-19 al AMBA visibilizó las desigualdades pre-existentes en el territorio, al ser los sectores más vulnerables, especialmente los localizados en áreas degradadas, sin servicios de agua para higienizarse y en condiciones de hacinamiento, los más expuestos al riesgo de contagio del virus. Esto se evidenció en los meses de abril y mayo del 2020, cuando la mayoría de los contagios de COVID-19 en la CABA afectó a población de las villas de la ciudad, donde se presentan los niveles más críticos de hacinamiento y donde incluso hubo problemas por falta de agua que, en algunos casos, se extendieron más de 10 días (como en la Villa 31-31bis).^[4] Estos problemas no solo impidieron el sostenimiento de las medidas de higiene necesarias, sino que también obligaron a los/as vecinos/as a romper las medidas de aislamiento para hacer extensas filas en busca de agua proveniente de camiones cisterna en distintos puntos del barrio.

[4] <https://www.pagina12.com.ar/340973-ramona-medina-murio-pidiendo-equidad-pero-el-agua-potable-no>.

15.2.2 El caso del Chaco salteño y la (histórica) emergencia hídrica y sanitaria

En la provincia de Salta, la región chaqueña es un espacio geográfico inmerso en procesos de expansión de la frontera agroindustrial, hidrocarburífera y de proyectos de infraestructura regional.^[5] Desde fines del siglo XX, el avance del modelo de agronegocios ha sido acompañado por la pérdida de biodiversidad, el incremento de fumigaciones con agroquímicos, la apropiación desigual y contaminación de recursos hídricos, y la degradación y eliminación de recursos boscosos. Este *modelo de desarrollo* trajo aparejado nuevas desigualdades sociales, económicas, espaciales y ambientales, al tiempo que vino a reforzar y/o resignificar desigualdades preexistentes (Schmidt 2019, 2022).

El acceso al agua potable es un problema recurrente e irresuelto en la región, tanto en áreas rurales como urbanas y periurbanas (véase figura 15.2). Al desagregar los datos del Censo Nacional 2010 y analizar el conjunto de jurisdicciones departamentales es posible apreciar que la cobertura no se distribuye de manera homogénea: en lo que respecta a condiciones de saneamiento, el promedio provincial presenta cifras más altas de cobertura (60.6 %) que las jurisdicciones, donde los departamentos que presentan cifras más alarmantes son Rivadavia (que carece de cloacas), Anta (32.8 %) y San Martín (41.3 %). Por su parte, las condiciones de accesibilidad al agua de red pública para las jurisdicciones departamentales también presentan valores inferiores al total provincial (92 %). Asimismo, es posible advertir que las diferencias de acceso no solo responden a criterios espaciales, sino también culturales y étnicos: la cobertura de agua por red pública en los hogares indígenas desciende a 72.1 %. El departamento con mayor déficit de accesibilidad a las redes de agua potable y cloacas es Rivadavia, con 47 % de agua y 0 % de cloaca.

En zonas urbanas, donde los hogares cuentan con cobertura de red, son recurrentes los cortes del suministro y las denuncias vecinales que apuntan a la mala calidad del agua domiciliaria y a las irregularidades en el servicio. La problemática se profundiza en zonas rurales, donde la baja densidad poblacional y su alta dispersión territorial dificulta la cobertura por medio de redes, por lo que el abastecimiento cotidiano se realiza a través de formas alternativas de aprovisionamiento: perforaciones con bomba a motor o manual,

[5] El Chaco Salteño comprende cerca de 7.000.000 ha y está conformado por los departamentos del este provincial (en especial, Anta, Rivadavia, San Martín y Orán), ubicados en la llanura chaqueña y el llamado «Umbral al Chaco», una zona de transición entre la ecorregión de las Yungas y el Chaco seco.

transporte por medio de camiones cisterna, recolección de agua de lluvia, canales y/o arroyos.

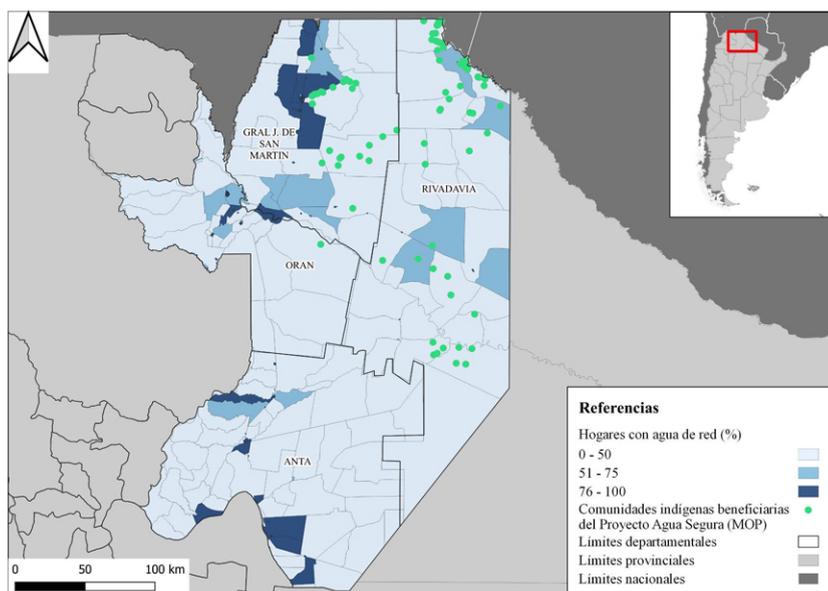


Figura 15.2. Comunidades indígenas beneficiarias del Proyecto Agua Segura y nivel de cobertura de agua potable en hogares (%) en el Chaco Salteño. Fuente: elaboración propia con base en INDEC (2010) y DNAPyS-MOP (2021b).

Si bien es posible apreciar un incremento de la cobertura en el último período intercensal (2001-2010), especialmente en la implementación de sistemas de cloacas, persisten las diferencias entre las jurisdicciones departamentales y el total provincial, así como la disparidad de cobertura entre el agua y las cloacas. En efecto, según el mapa de vulnerabilidad sanitaria desarrollado por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento para localizar zonas prioritarias de acción (DNAPyS-MOP 2021b), los departamentos del norte provincial se encuentran entre las jurisdicciones con los valores críticos más altos del país. Esta afirmación emerge del cruce de cuatro indicadores: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), NBI sanitario (hogares sin retrete), casos por diarrea en menores de 5 años cada 100.000 habitantes (2019) y muertes por diarrea en menores de 5 años cada 100.000 habitantes (2010-2017), a partir de lo cual se concluyó que esta región de la provincia de Salta es una de las más comprometidas.

Por su parte, las actividades desplegadas por diversos emprendimientos – como el agronegocio, la ganadería empresarial y la

producción hidrocarburífera – no solo han privado del acceso al recurso hídrico a las poblaciones indígenas y campesinas que habitan el territorio, sino que impactan en la contaminación y degradación de las fuentes de agua disponibles (es el caso, por ejemplo, de las consecuencias derivadas de las pulverizaciones con agroquímicos en los cultivos regionales). A su vez, la región chaqueña presenta contaminantes naturales del agua subterránea, como es el caso del arsénico, que afecta su calidad y expone a la población que la consume a mayores riesgos de salud (Belmonte *et al.* 2021; López *et al.* 2018).

Estas situaciones estructurales se vuelven urgentes y cobran estado público de modo cíclico en la provincia, ante los casos de desnutrición y muerte en niños indígenas, cuyas causas se asocian a condiciones socioeconómicas, ambientales, sanitarias e hídricas de largo plazo. En particular, las medidas de cuidado y aislamiento decretadas a inicios del año 2020 debido a la pandemia por COVID-19 tuvieron lugar de modo simultáneo a la declaración del estado de Emergencia Sociosanitaria dispuesto por el gobierno salteño en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia (ley 8.185/2020, luego prorrogada en reiteradas oportunidades).^[6]

15.3 Políticas y programas de infraestructura hídrica en el marco del COVID-19

En este apartado, damos cuenta de las distintas políticas y programas que se emprendieron a nivel nacional durante el período 2020-2022 para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrentan las áreas más postergadas en materia de accesibilidad a servicios de redes de agua y saneamiento. Para ello, nos centramos en dos actores estatales principales.^[7] Por un lado, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS) perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (MOP), encargada de diseñar y llevar adelante políticas tendientes a ampliar la cobertura de servicio de agua y cloaca a las áreas más deficitarias del país, especialmente en la región norte. Por otro lado, la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos

[6] <https://www.pagina12.com.ar/406213-a-dos-anos-de-la-emergencia-sociosanitaria-afirman-que-nada->.

[7] El trabajo se centra en analizar las acciones de la DNAPyS y AySA, pero vale destacar que existe un tercer actor a nivel nacional con competencia en obras de agua y saneamiento que es el ENOHSa.

SA (AySA),^[8] con competencia en la CABA y los partidos del Gran Buenos Aires.

15.3.1 La inversión en infraestructura hídrica en regiones con déficit de acceso al agua

De acuerdo al esquema de competencias previsto en la Constitución Nacional del año 1994, en Argentina rige un régimen federal en materia de recursos hídricos. No existe una ley nacional de agua y saneamiento y la gestión de los recursos hídricos junto con la operación, regulación y control en la prestación se encuentra descentralizada hacia las provincias, que presentan gran diversidad de formatos y estrategias para brindar estos servicios en sus territorios (empresas provinciales, municipales, privadas y cooperativas de servicio).^[9] Se configura entonces una institucionalidad y gobernabilidad hídrica caracterizada por una dispersión de organismos, empresas prestadoras y entes de regulación, y por la falta de articulación entre los distintos niveles de gestión y las autoridades encargadas del control y monitoreo de la calidad y cantidad de agua efectivamente brindada. Vale destacar asimismo la inexistencia de espacios de representación y participación ciudadana donde se puedan canalizar y gestionar denuncias a las empresas prestatarias (Juárez 2015).

[8] AySA se creó en marzo de 2006 frente a la rescisión del contrato de concesión con la entonces empresa de capitales franceses, Aguas Argentinas SA. Está formada en un 90 % por capital del Estado nacional, mientras que el 10 % restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA).

[9] La mayoría de las provincias cuentan con empresas provinciales de agua y saneamiento, creadas a partir de la descentralización de la empresa federal Obras Sanitarias de la Nación en la década de 1980. En el AMBA, los principales actores encargados de brindar el servicio de agua y saneamiento son la empresa estatal AySA (que tiene competencia en la zona más urbanizada y densificada del territorio que comprende la CABA y prácticamente la totalidad del GBA, donde viven cerca de 12 millones de personas) y la empresa provincial Aguas Bonaerenses SA (ABSA), que se encarga de 79 localidades de la provincia, donde residen aproximadamente 2,5 millones de personas. Por fuera de estas dos empresas, intervienen también en algunas localidades cooperativas de servicio e incluso prestadores municipales. En Salta, la prestación del servicio depende de la empresa Aguas del Norte, Compañía Salteña de Agua y Saneamiento. Se encuentra bajo gestión estatal, luego de haber sido privatizada hacia fines de la década de 1990 como Aguas de Salta SA y reprovincializada en el año 2009. Es la encargada de abastecer del servicio de agua potable a 92 localidades (en 30 de estas, además de agua, brinda también servicios de cloacas).

No obstante lo señalado, desde la esfera nacional diversos organismos estatales implementan programas y proyectos de acceso al agua para consumo humano y/o productivo, con recursos nacionales y/o préstamos internacionales, en articulación con otras entidades provinciales, organizaciones sociales y territoriales. Con base a información publicada por los organismos nacionales en sus páginas web y a entrevistas con informantes clave, nos detenemos en los principales proyectos y obras de infraestructura hídrica impulsados en los años 2020-2022, cuando las históricas desigualdades en el acceso al agua se vieron solapadas con la emergencia sociosanitaria que implicó la pandemia por COVID-19.

De acuerdo con información suministrada en las entrevistas realizadas, el Presupuesto Nacional destinado a gastos de capital de agua potable y saneamiento hacia 2019 promedió los \$ 20.000 millones, mientras que en los años posteriores el contexto de pandemia llevó a que las inversiones en el sector se incrementen alcanzando un total de \$ 70.000 millones en 2020 y \$ 216.000 millones en 2021 (esta última cifra corresponde al monto del presupuesto ejecutado). Tomando en consideración la proporción del presupuesto nacional total destinado al sector, este pasó de un promedio de 0,5 % en 2019 (el nivel más bajo desde el año 2010), al 2 % en el 2021 (el % más alto en el período considerado). Según datos anunciados por el organismo, la inversión realizada en obras de agua y cloaca a partir del 2019 a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la empresa AySA y la propia Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica perteneciente al MOP, permitirá ampliar al año 2023, la cobertura de servicios a 2,5 millones de habitantes (del total de 9 millones que carecen actualmente de estos servicios). Esto se logrará a partir de la implementación de distintas iniciativas como son el Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos creado en el año 2020, centrado en implementar obras que permitan aumentar para el año 2023 la cobertura en agua de un 80,2 % que había en 2019, a 85,8 %; y de 56,1 % a 63,2 en saneamiento; junto con obras de ampliación, mantenimiento y remodelación de la infraestructura hídrica que permitan mejorar la calidad en el servicio a aproximadamente 5,8 millones de usuarios de la red de agua y 11,3 millones de usuarios de la red de saneamiento.^[10]

En lo que refiere a los departamentos chaqueños de la provincia de Salta, en el período señalado distintas dependencias de organismos nacionales llevaron adelante obras para captación, filtrado y almacenamiento de agua en áreas sin provisión (perforación de pozos y/o sistemas colectores de agua de lluvia, por ejemplo), así como

[10] <https://www.argentina.gob.ar/noticias/desde-el-2019-ampliamos-25-millones-de-personas-el-servicio-de-agua-potable-y-saneamiento>.

también para potabilización, optimización del servicio y recambios de redes, riego para huertas, sistemas de grifos comunitarios, filtros para arsénico y cisternas móviles, entre otras. Las mismas se impulsaron desde el Programa PROHUERTA perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Ministerio de Desarrollo Social) y el Programa de Inserción Socio-Económica en Áreas Rurales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros. También cobran atención los proyectos financiados a través del Programa de Desarrollo Social en áreas fronterizas del NOA, NEA con NBI del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Programa Bosques Nativos y Comunidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En todos los casos, estos proyectos fueron destinados mayormente a familias campesinas y comunidades indígenas y se implementaron en articulación con Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil de accionar territorial (Schmidt y Tobías 2021).

En particular, tomamos como ejemplo al Proyecto Agua segura en Comunidades indígenas de la provincia de Salta, financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2776/OC-AR), ejecutado por la Unidad Belgrano Norte Grande y enmarcado dentro de las acciones de la DNAPyS para el actual Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación «Argentina Grande».^[11] En agosto de 2021 se lanzó la convocatoria a licitación pública para la construcción de sistemas de captación, filtración y almacenamiento de agua de lluvia para consumo doméstico destinados a comunidades rurales dispersas pertenecientes a pueblos originarios de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. El presupuesto disponible es cercano a los \$ 900 millones (valores a abril 2021) y el plazo de construcción es de 24 meses desde la fecha de inicio de las obras.^[12] Está previsto que las mismas beneficien a un total de 865 familias distribuidas en 91 comunidades, de las cuales 400 se encuentran comprendidas en el territorio afectado por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos («Comunidades indígenas

[11] <https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/argentina-grande-plan-de-obras-publicas-para-el-desarrollo-de-la-nacion> y <https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/infraestructura-y-politica-hidrica/agua-potable-y-saneamiento>.

[12] El procedimiento de selección fue declarado fracasado en febrero de 2022, en virtud de haberse recibido una única oferta válida, que no cumple los requisitos licitatorios. Para más detalles véase <https://licitaciones.obraspublicas.gob.ar/Biddings/Public-Bidding/2128>.

miembros de la Asociación Lhaka Honhat versus Argentina»).[13] Así describen la propuesta desde la DNAPyS:

«El proyecto que hicimos en Salta es un sistema simple, que es un techo grande, como de 10x10, 9x9, más un separador de primeras aguas, más una cisterna grande como de 3,5 metros de diámetro, más una bombita. Lo hicimos para población exclusivamente indígena dispersa, con desinfección que lo haría el propio habitante, (...) 865 cisternas familiares. Es un sistema pensado para 5 personas por familia. Lo hicimos junto con el INAI [Instituto Nacional de Asuntos Indígenas] y otros organismos. Y se licita en obra común, financiada por el BID, una empresa va a inspeccionar la obra, y va a haber acompañamiento social de 2 años: 6 meses antes de que empiece la obra y un año y medio después que termine la obra».[14]

Si bien hacemos foco en el proyecto mencionado, cabe destacar que desde el mismo MOP se han impulsado otros programas de infraestructura hídrica en el marco de la pandemia y la emergencia sociosanitaria. Por ejemplo, en octubre de 2020 se rubricó un Convenio de asistencia financiera entre el gobierno salteño y el ENOHSA para la ejecución de 91 proyectos de agua y saneamiento (por un total de \$ 2.300 millones). En ese marco, la Secretaría de Obras Públicas provincial acordó la ejecución de obras hídricas en diversas localidades de los departamentos de Rivadavia y San Martín (optimización del servicio, ampliación de redes distribuidoras, conexiones domiciliarias, perforación de pozos, plantas potabilizadoras, entre otras).[15]

En lo que refiere a la expansión de la cobertura de servicios de agua y cloaca en los barrios populares del AMBA, AySA viene desarrollando los programas Agua+Trabajo (A+T) y Cloaca+Trabajo (C+T), que forman parte del plan de obras diseñado por la empresa para universalizar los servicios dentro de su área de concesión. Se iniciaron para el caso del agua potable en el año 2004, dentro de la gestión privatizada de Aguas Argentinas, en el municipio de La Matanza, y durante la prestación de AySA ampliaron su alcance al total de municipios donde presta servicios la empresa. Los programas

[13] Se trata de un conflicto territorial de largo aliento que involucra población originaria y familias criollas de los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. La sentencia del año 2020 dispuso, entre otras medidas, que el Estado nacional debe identificar las situaciones críticas de acceso al agua y formular un plan de acción para su abordaje, en diálogo con las comunidades. https://www.corteidh.or.cr/ver_expediente.cfm?nId_expediente=276&lang=es.

[14] Entrevista realizada en agosto de 2021.

[15] <https://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/saenz-firmo-dos-convenios-con-enohsa-para-proveer-agua-potable-en-santa-victoria-este-74314>.

A+T y C+T fueron creados como modelos de gestión para llevar los servicios a las áreas más vulnerables con elevados niveles de riesgo sanitario, y suponen la creación de redes a través del trabajo de la empresa con cooperativas barriales.

De este modo, contemplan un esquema de gestión que articula distintos actores. En primer lugar, AySA, encargada de administrar y financiar las obras, intervenir en aspectos técnicos y sociales y capacitar a los cooperativistas. En segundo lugar, la Agencia de Planificación (APLA), que representa uno de los órganos de control de la empresa (junto al Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y, en lo que respecta a estos programas, se encarga de realizar su seguimiento y del estado de avance de las obras y nivel de inversión. En tercer lugar, las cooperativas de trabajo, encargadas de aportar la mano de obra para la ejecución de las obras, tareas por las que reciben una remuneración según el grado de avance mensual. En cuarto lugar, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que acompaña el proceso de inscripción y conformación de cada cooperativa, ofreciendo capacitación en aspectos legales y administrativos. Por último, los municipios, que representan el ente ejecutor de las obras, son quienes presentan las áreas a expandir, administran los recursos transferidos por AySA y contratan a las cooperativas de trabajo.

El programa A+T y C+T lo lleva adelante el Área de Desarrollo de la Comunidad de la empresa que, si bien comenzó siendo un área marginal dentro de la misma, en los últimos años creció incorporando nuevos recursos humanos y líneas de financiamiento específicas. Los datos acumulados a diciembre de 2021 dan cuenta de un total de 978 obras, 330.878 conexiones instaladas, 3.434 km de redes instaladas, 1.532.426 personas beneficiadas y 16.000 empleos generados.^[16] A pesar del avance logrado en la visibilización y el crecimiento de estos programas específicos para áreas vulnerables, vale destacar que en muchos casos los beneficios de la extensión de las redes a los barrios, principalmente en el caso de las cloacas, no son aprovechados en su totalidad. Esto es así porque la conexión a las nuevas redes públicas, así como las instalaciones intradomiciliaria requeridas quedan en responsabilidad de los nuevos usuarios, y en muchos casos las familias no logran conectarse, sea por el elevado costo que estas obras representan para los hogares o bien por el desconocimiento (Babbo 2014). Frente a esta situación, los planes A+T comenzaron a incluir en el año 2020, además de las redes secundarias en la vereda, la instalación de una canilla de agua al interior del lote (pero fuera de la vivienda). Para ello, han contado con líneas específicas de financiamiento de organismos internacionales así como con

[16] https://www.aysa.com.ar/Que-Hacemos/Plan-de-obras/A-T_C-T.

aportes propios de la empresa para reducir el riesgo sanitario de los barrios populares en el contexto de la pandemia por COVID-19. En el año 2020 FONPLATA aprobó el financiamiento de 30 millones de dólares para la construcción de redes de infraestructura en el marco de los programas A+T y C+T en municipios del AMBA (el programa total tiene un costo de 40 millones, 30 corresponden a FONPLATA y 10 a la propia empresa). Asimismo, AySA cuenta actualmente con financiamiento del Banco Mundial y del BID para la realización de conexiones intradomiciliarias.

15.3.2 Las obras hídricas y el mercado laboral

En adelante, indagamos en el modo en que estos proyectos de infraestructura hídrica permiten generar nuevas fuentes de trabajo y/o dinamizar el mercado laboral a nivel local y/o regional, para responder así no solo a la crisis hídrica y sanitaria sino también a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia. De acuerdo a las políticas relevadas, encontramos dos modalidades principales de ejecución de las obras en territorio: en el caso del proyecto para Salta de sistemas de captación de agua de lluvia, se lleva a cabo a través de licitaciones públicas para la convocatoria a empresas, que son las encargadas de contratar la mano de obra. Por su parte, en el AMBA, AySA construye las obras mediante convenios con municipios y cooperativas locales en el marco de los planes A+T y C+T. En ambos casos, nos interesa reflexionar sobre las modalidades de reclutamiento laboral, la participación de la población local en la toma de decisiones y la continuidad de las fuentes de trabajo creadas en el mediano y largo plazo.

La implementación en territorio del plan de acceso al agua segura en comunidades indígenas para la provincia de Salta ejecutado desde la DNAPyS-MOP con financiamiento internacional consta de tres componentes:

- 1) relevamiento en campo y localización de las comunidades y familias beneficiarias, considerando su nivel de acceso a fuentes de agua segura y distancia a centros urbanos;
- 2) ejecución de las obras;
- 3) acompañamiento social, capacitación y monitoreo con el fin de garantizar el correcto uso, operación y mantenimiento de los sistemas (por un plazo de dos años).

La primera y última de las etapas están a cargo de Organizaciones de la Sociedad Civil contratadas para estos fines específicos, mientras que la segunda involucra a contratistas privados (MOP-DNAPyS, 2021a). En palabras de integrantes de la DNAPyS:

«Se repite el esquema tradicional mediante el cual una empresa ejecuta la construcción de la obra y otra empresa que fiscaliza la construcción o que representa al contratante que es la inspección de obra. Eso digamos se repite ese esquema por una cuestión también de que el Banco así lo exige. Se pensó también en algún momento poder hacerlo de una forma con cooperativas, de una forma un poco más menor, pero no se puede. Los créditos internacionales tienen esas limitaciones y tienen que ser un sistema tradicional con determinados requisitos. Por ese motivo se recurrió a ese sistema. (...) En realidad se exige como mínimo un 20 % de mano de obra local, pero igual hay un agregado en el pliego que tiene que ver con que ese porcentaje de mano de obra es difícil de lograr porque por ahí no hay interés».^[17]

Tal como anticipa el fragmento de la entrevista, en lo que respecta a la contratación de mano de obra, los pliegos de la licitación señalan que se busca contribuir a la generación de ingresos de las personas del área de influencia de los proyectos, particularmente de las comunidades originarias (sumado al objetivo de mejorar la aceptación local del proyecto y generar un mayor sentido de apropiación de las instalaciones a ejecutar). En este sentido, se prevé la creación de un Programa de contratación de mano de obra local, que priorice la incorporación de personal oriundo de los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán, con énfasis en pobladores indígenas pertenecientes a las comunidades a intervenir y reduciendo al mínimo la contratación de personal foráneo. Se espera asimismo que la empresa priorice la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada en el proceso constructivo, de pobladores pertenecientes tanto a comunidades originarias como a comunidades criollas de la zona. Para la mano de obra no calificada, el pliego licitatorio anuncia que se deberá contemplar la incorporación de personal local y se priorizará la mano de obra indígena, especialmente de aquellos pobladores que pertenezcan a las comunidades beneficiarias. Sobre esto último se estipula que, siempre que sea posible, se deberá contar – para la ejecución de las obras civiles – con un mínimo de 20 % de mano de obra que pertenezca a las correspondientes comunidades del lugar de emplazamiento de las obras (sobre la mano de obra total contratada) (DNAPyS-MOP 2021a).

En el documento de Estudio de Impacto Ambiental y Social (DNAPyS-MOP 2021a) se hace referencia al impacto en el desarrollo económico. Se afirma que las actividades previstas en la fase constructiva requerirán mano de obra (tanto especializada como no calificada) y de adquisición de materiales y servicios de construcción, lo cual producirá un impacto positivo en la generación de empleo y en la dinamización de la actividad de comercio de bienes y servicios.

[17] Entrevista realizada en agosto de 2021.

Estos impactos son considerados positivos, pero de carácter transitorio. Del mismo modo, se destaca que la ejecución de las obras con al menos un 20 % de mano de obra perteneciente a las comunidades afectadas redundará en un beneficio económico para esas familias, a la vez que significará la generación de nuevas habilidades en los trabajadores mediante las capacitaciones que recibirán para las tareas. Si bien estos impactos se consideran positivos, están caracterizados por ser de carácter transitorio, puntual y de baja intensidad (beneficiará a un grupo reducido de familias). Vale advertir que los pliegos licitatorios no aportan especificaciones respecto de las modalidades de contratación ni sobre el cupo de género previsto en la contratación de mano de obra. No obstante, en línea con las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID, se prevé que en la etapa de capacitación y mantenimiento posterior a las obras se incluyan encuentros para mujeres con el fin de fortalecer su participación y capacidades de uso y gestión de la infraestructura construida.

Lo antedicho puede contraponerse con otras obras hídricas de similares características impulsadas en el período considerado, pero que se ejecutan de modo distinto. Por ejemplo, las que remiten al convenio entre el ENOHSa y la provincia que, de acuerdo a lo señalado por integrantes de la Mesa de Agua del Chaco salteño:

«Baja la plata la provincia, pero la provincia está obligada a ejecutarla a través de las ONGs. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde está la cabeza de la Mesa del Agua, firma convenio con las ONGs que se presentan y que cumplen con la requisitoria administrativa (...). Y estas organizaciones tenían seleccionados sus beneficiarios, que en algunos casos eran comunidades indígenas, que en otros casos eran familias criollas (...). La metodología de construcción debe ser una metodología de construcción participativa, donde la gente esté involucrada. Porque justamente las cosechas de agua son soluciones para población dispersa, que no puede estar dependiendo de una empresa exclusivamente. Porque ¿qué es lo que pasa cuando la empresa termina la obra llave en mano y se la entrega al cacique, se la entrega a la jefa o jefe de familia criolla, se va, y los tipos no saben cómo funciona eso, no entienden qué es lo que pasa si algo se rompe? (...) Entonces lo básico de la metodología es que nosotros capacitamos el grupo de constructores que se va armando, que son grupos de actores locales, no son empresas las que vienen a hacerlas. Entonces las fundaciones lo que hacen es colaborar con la parte administrativa, con la parte de logística, con la parte de compras. Y son los grupos de constructores locales que están capacitados los que van armando y los que van construyendo las cisternas y que van enseñándole a la gente cómo funcionan, qué es lo que están haciendo y cómo se construye eso, cómo funciona y cómo se puede arreglar el

día de mañana que no esté la empresa ya en la zona. Esa es la diferencia que nosotros tenemos por ahí con otros sistemas».^[18]

Un requisito insoslayable para la implementación de este tipo de proyectos de infraestructura en territorios indígenas remite a los mecanismos de consulta libre, previa e informada, que apuntan a la participación e involucramiento de las poblaciones beneficiarias para la toma de decisiones y la apropiación de las obras en el largo plazo. Al respecto, cabe destacar que en el transcurso de la primera etapa del proyecto del BID se implementaron distintas instancias de consulta y dispositivos participativos, en un trabajo colaborativo con el INAI, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones con trabajo territorial en la región:

«En lo que quedaban dentro de lo que son los lotes 55 y 14, ahí en Santa Victoria Este, el proceso de consulta en realidad fue directamente con Lhaka Honhat a través del CELS y eso se enviaban notas y se hicieron consultas y asambleas en Lhaka Honhat, que aprobaron el proyecto. Ellos nos hicieron una devolución de las comunidades que requerían cisternas, la ubicación y la cantidad de cisternas. Directamente lo eligieron ellos. Y se hizo una aprobación del proyecto por parte de Lhaka Honhat. Y en el resto de las zonas, todo lo que es Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, San Martín y en Orán en realidad solamente hay un punto, una comunidad, se hicieron primero consultas a través de los CPI [representantes del Consejo de Participación Indígena del INAI] y después directamente con las comunidades, siempre divididas por pueblos. Son mayoritariamente wichi las comunidades, pero hay algunas iogys y otras chorote. Y se hizo todo el proceso de consulta en base a los requerimientos también del Banco. Y estuvo interesante, porque participamos vía Zoom, un telefonito ahí en el medio del monte, todos los representantes, los caciques de cada comunidad reunidos y haciendo un intercambio sobre el proyecto».^[19]

Si bien la primera etapa del proyecto ya se ha cumplido, en acuerdo con los requisitos participativos incluso en el contexto de pandemia y aislamiento social, a la fecha del cierre del presente artículo la licitación no logró ser adjudicada a ningún oferente y se encuentra en proceso de reestructuración (nuevas licitaciones más pequeñas, en lotes de una menor cantidad de sistemas, para garantizar que empresas contratistas locales se sumen al proceso licitatorio). Mientras tanto, el acceso al agua segura y las expectativas de contribución a las condiciones sanitarias regionales, junto con la (si bien temporal) oferta laboral a las poblaciones locales para una mejora en su situación socioeconómica, aún no se han plasmado en el territorio.

[18] Entrevista realizada en abril de 2022.

[19] Entrevista realizada en agosto de 2021.

En el caso de los planes A+T y C+T que lleva adelante AySA en el AMBA, se crearon – como ya vimos – con el doble objetivo de reducir el riesgo sanitario en áreas populares, por un lado; y ofrecer fuentes de empleo local, por otro. Cuando comenzaron en el año 2004, el programa A+T formaba parte del entonces Plan Jefas y Jefes de Hogares Desocupados (sucesor del Plan Trabajar). Como destaca **Kasparian (2020)**, luego de la crisis que afrontó el país en el 2001, comenzó un proceso de recuperación económico y social y se pasó de los programas de transferencia de emergencia laboral a estrategias de protección social orientadas a la inclusión social a través del «trabajo digno y genuino». Así, se comenzó a promover el trabajo asociativo y autogestionado y algunos programas específicos – como es el caso del A+T – se enfocaron en la creación de cooperativas de trabajo que pudieran ejecutar obra pública. Si bien muchas cosas cambiaron en el país y en el sector desde entonces a esta parte, el objetivo del programa A+T (ahora también C+T) sigue siendo el de articular la política social a través de cooperativas de trabajo para la creación de obra pública en los barrios más vulnerables.

Actualmente, existen alrededor de 60 cooperativas en funcionamiento con un promedio de 20 integrantes cada una. Con relación a la modalidad de contratación, AySA se encarga de firmar convenios con los distintos municipios quienes, por su parte, contratan a las cooperativas conformadas por asociados/as, por el plazo de duración de la obra. Los cooperativistas son capacitados por la empresa a través del Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal, que pertenece al sindicato de la empresa (SGBATOS). En el marco de la pandemia, los esquemas y formatos de capacitación tuvieron que replantearse y se pasó a una forma de capacitación presencial en obra (es decir, en el terreno). La capacitación obtenida por los cooperativistas, luego complementada con la experiencia de la realización de las obras en los barrios, lleva a que la empresa prefiera tener continuidad de trabajo con las cooperativas ya formadas. En palabras de miembros del área de la Desarrollo de la Comunidad:

«Estamos haciendo un trabajo de avance más continuo digamos, porque, por el otro lado, cuando uno trabaja con muchísima cantidad de cooperativas al mismo tiempo, un poco se descontrola el trabajo. Es una relación que hay que cuidar mucho digamos, hay que atender muy minuciosamente las distintas situaciones que van pasando con los vecinos y con la cooperativa hacia el interior de la cooperativa en sí, para que pueda consolidarse como cooperativa como grupo de gente y pueda tener alguna proyección un poco mayor. Sino, hay mucha gente que se da cuenta en esa primera obra, que no es para ese trabajo, o no le rinde, o no lo sé, entonces se produce una rotación enorme y eso produce malestar en la comunidad donde se está trabajando porque la obra empieza, se corta, se discontinúa, y ese proceso no lo podemos vivir permanentemente.

Entonces tratamos de que la cooperativa tenga una determinada continuidad, la primer obra pasará eso y después ya hacia el final de la primer obra se produce la consolidación del grupo de trabajo con los roles que el grupo de trabajo se establece y esa consolidación hace que consideremos que sea apropiado que por lo menos haga dos o tres obras y esta es un poco la forma por la cual disponemos de determinadas obras para desarrollar y otra de las razones tiene que ver con la complejidad del trabajo. Tratamos de que no sea terriblemente complejo porque no lo van a poder desarrollar porque no tienen el equipamiento y no le podemos dar el apoyo necesario para el desarrollo de esas tareas. Entonces, por una cuestión de nuevo, de no quedar mal con un barrio, hay tareas que no puede desarrollar una cooperativa y hay tareas que deben ser desarrolladas sí o sí por un contratista».^[20]

En el fragmento recién destacado, se pueden observar los alcances y limitaciones que tienen las cooperativas en términos técnicos, para trabajar de manera continua en obras del sector. No obstante, los cooperativistas tienen a su cargo la realización del trabajo territorial en los barrios, que en definitiva es tan o más importante que los conocimientos técnicos de las obras.

«La calificación o el tipo de capacitación que se da es igual para todos. La cooperativa establece, en definitiva, cómo se distribuyen en cada grupo de trabajo sus roles. Pero la capacitación técnica es igual para todos. Posteriormente, lo que se va haciendo es reforzando lo relativo al trabajo territorial y al trabajo más de sensibilización con la comunidad, eso se van haciendo talleres particulares para menos personas. Y los tutores que tenemos en la Dirección van haciendo ese seguimiento. Se arma como un plan de tareas o un plan de acción que se va respetando mes a mes y ese plan de acción es certificable como si fuese una tarea técnica. Si no lo incorporamos de esa manera el trabajo no se entiende como trabajo y no se entiende como una tarea más. Entonces existe el acta de medición técnica que se incorporan certificado y el acta de medición social en el certificado también y es certificable».^[21]

Una vez realizada la obra, los hogares conectados pasan a ser usuarios de la empresa, por lo que AySA pasa a velar por el mantenimiento de las infraestructuras:

«Cuando una obra de A+T termina, AySA tiene la obligación de su mantenimiento y operación. Es decir, todos los habitantes de ese barrio tienen el mismo derecho que tenemos cualquiera de nosotros en cualquier área formal de la ciudad con el derecho a llamar por teléfono y que AySA tenga que ir a hacer las reparaciones correspondientes con la tutela del Ente regulador con la regulación de esa agua servida».^[22]

[20] Entrevista realizada en octubre de 2021.

[21] Entrevista realizada en octubre de 2021.

[22] Entrevista realizada en octubre de 2021.

No obstante, es importante destacar que históricamente los planes A+T y C+T han presentado serios problemas de mantenimiento de las redes, ya que una vez finalizada la obra, la empresa deja de tener llegada directa al barrio. Por fuera de estos detalles, un dato interesante que se agrega a partir del cambio de gestión de gobierno en el año 2019 es el marcado interés por introducir la perspectiva de género dentro de la empresa, y especialmente, dentro de los programas con cooperativas.^[23] Así, tal como advierten trabajadores de la empresa, las cooperativas existentes fueron reestructuradas, incorporando un mayor número de mujeres:

«Pasamos de 16 a 20 integrantes la cooperativa, con la obligación de que como mínimo estas nuevas cuatro personas tenían que ser mujeres. Y en las cooperativas nuevas que se forman, tienen que ser sí o sí un 50 %. Al día de hoy estamos con 51 % de integrantes mujeres en el plan. El año pasado lo terminamos con un 35 % y al día de hoy está en un 51 %».^[24]

Además de la búsqueda de paridad de género, otro elemento que se incorporó recientemente en el marco de los planes A+T y C+T es la figura de los promotores sociocomunitarios, con el objetivo de «que exista un fuerte trabajo territorial y un mayor vínculo con el barrio donde se está trabajando». Esta figura refiere a integrantes de las propias cooperativas (en general asociados a la figura femenina) que tienen un mejor trato o relación con la comunidad y que realizan diversos relevamientos y trabajos de concientización en el barrio sobre la importancia de las obras y de la conexión, tanto a nivel social como ambiental. Tienen un rol fundamental en el éxito de los planes, ya que, en muchos casos, a pesar de la realización de las obras, los hogares terminan sin conectarse a la red por falta de recursos económicos propios o bien por desconocimiento de las ventajas de estar conectado.

Un último punto a destacar remite a las estrategias desplegadas desde la empresa para dar continuidad a los ingresos laborales, cuando AySA debió paralizar de manera momentánea la ejecución de las obras en respuesta a las medidas nacionales de aislamiento y cuidado. En ese marco, las cooperativas recibieron ayuda económica por parte de la empresa estatal para evitar quedarse sin ingresos (el monto era similar al del Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el Gobierno Nacional). Si bien la empresa suspendió temporalmente las obras, en algunos municipios les costó retomar los programas A+T y C+T debido a las medidas tomadas por los poderes locales

[23] https://www.aysa.com.ar/usuarios/Novedades/2022/06/avanzan_obras_de_agua_Barrío_Azul.

[24] Entrevista realizada en octubre de 2021.

«Hubo algunos municipios que establecieron cierres muy fuertes y que impedían el trabajo en los barrios porque establecieron un esquema en el cual la idea era que no hubiera muchos movimientos en el territorio. Y en esos casos mantuvimos suspendidas las obras un poco en consenso, en conjunto con el municipio cobrando esta ayuda hasta tanto se pudo reiniciar las obras. Durante todo este período pudimos ir firmando nuevos acuerdos, firmamos con todos los municipios donde trabajamos convenios marcos nuevos convenios».^[25]

15.4 Reflexiones finales

El trabajo se propuso analizar los efectos de la pandemia por COVID-19 en las desigualdades hídricas y sanitarias de poblaciones vulnerables que habitan dos territorios con características diferenciales. En primer lugar, las experiencias relatadas permiten advertir que en áreas periurbanas e indígenas en el Chaco salteño y los barrios populares en el AMBA, las desigualdades hídricas se asientan en procesos históricos y se yuxtaponen con otras desigualdades preexistentes. En este marco, la pandemia logró visibilizar y profundizar la crisis sanitaria, económica y ambiental que enfrentan estos territorios. Crisis que no solo se expresa en términos de accesibilidad sino también en problemas asociados a la calidad y continuidad de los servicios.

En segundo lugar, buscó indagar el modo en que, dentro del sector de agua y saneamiento, la pandemia dinamizó líneas específicas de financiamiento para la construcción y ampliación de obras de infraestructura hídrica para responder a la emergencia sanitaria. Si bien algunas de estas líneas existían previamente al COVID-19, la emergencia sanitaria implicó una mayor atención y focalización por parte de los organismos gubernamentales en el desarrollo de obras en áreas vulnerables y con déficit estructurales, como el AMBA y la región chaqueña en Salta. No obstante estos avances, y con sustento en investigaciones precedentes, podemos aventurar ciertas limitaciones o problemas vinculados a la implementación de este tipo de soluciones tecnológicas diseñadas para brindar servicio de agua en áreas sin cobertura. En muchos casos son programas pensados de «arriba hacia abajo», es decir, sin contemplar mecanismos participativos reales que permitan repensar la infraestructura en función de los usos y costumbres locales. A su vez, existen problemas frecuentes con relación a la gestión y el mantenimiento de estas obras, dado el complejo entramado de actores que terminan interviniendo en la operación de infraestructuras – no solo empresas prestadoras, gobiernos locales, provinciales y organizaciones sociales, entre otros – (Juárez 2015; Schmidt y Tobías 2021; Tobías *et al.* 2020).

[25] Entrevista realizada en octubre de 2021.

A partir de los casos analizados, se intentó remarcar que, en contextos y territorios donde la gestión del agua representa una problemática irresuelta, la posibilidad de acceder a fuentes seguras de provisión supone no solo una mejora «técnica», sino también un reconocimiento social y político en tanto ciudadanos (Larkin 2013). En este sentido, sostenemos que las redes de infraestructuras deben ser entendidas como procesos que precisan esfuerzos e inversiones constantes para su funcionamiento: son siempre «logros precarios» (Graham 2010, pág. 10). Esto lleva a reforzar la centralidad e importancia del Estado en sus distintos niveles y competencias para garantizar el mantenimiento, control y regulación de las obras, con el fin de que el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para las poblaciones beneficiarias de estos proyectos se cumpla no solo durante la contingencia de una crisis hídrica y sanitaria sino también en el mediano y largo plazo. En adición, implica también el acompañamiento y fortalecimiento de las experiencias comunitarias y autogestivas que buscan desarrollar autónomamente esta provisión de agua segura.

En tercer y último lugar, en lo que refiere a la implementación de los proyectos y programas de abastecimiento de agua en los territorios, pudimos ver que en términos generales su diseño contempla la generación de puestos de trabajo local y el involucramiento de las poblaciones en la construcción de las obras y su mantenimiento posterior. Esto puede ejecutarse bajo diversas modalidades (cooperativas en convenio con municipios, contratos vía privados, entre otras), pero la característica común es que no supone un puesto laboral estable en el largo plazo, ya que son contratos temporales. Por tanto, aún persisten dificultades e incertidumbre en torno a su implementación y a la continuación de los puestos de empleo generados. No obstante ello, estas experiencias permiten fortalecer procesos organizativos en los territorios a la vez que, a través de la incorporación de mano de obra local – y especialmente del cupo de género y de población indígena – estos programas se proponen fortalecer el involucramiento de sectores sociales relegados en el mercado de trabajo local.

Referencias

ANAND, NIKHIL

- 2017 *Hydraulic city: Water and the infrastructures of citizenship in Mumbai*, Duke University Press, referencia citada en página 373.

BABBO, LUIS

- 2014 *Saneamiento y Desarrollo Urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires*, maestriathesis, Universidad de Buenos Aires, referencia citada en página 385.

BELMONTE, SILVINA; EMILCE LÓPEZ y MARÍA GARCÍA

- 2021 «Identificación de áreas prioritarias para la gestión del agua en el Chaco salteño, Argentina», en *Agua y Territorio*, n.º 17, págs. 7-32, referencia citada en página 380.

BOWKER, GEOFFREY

- 1994 *Science on the run: Information management and industrial geophysics at schlumberger, 1920-1940*, MIT Press, referencia citada en página 372.

DNAPYS-MOP

- 2021a «Estudio de Impacto Ambiental y Social», en *Proyecto agua segura en comunidades indígenas de la provincia de Salta*, Ministerio de Obras Públicas. Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, referencia citada en página 387.
- 2021b «Memoria Descriptiva», en *Proyecto agua segura en comunidades indígenas de la provincia de Salta*, Ministerio de Obras Públicas. Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, referencia citada en página 379.

GRAHAM, STEPHEN

- 2010 «When infrastructures fail», en *Disrupted Cities: When Infrastructure Fails*, Routledge, págs. 1-26, referencia citada en página 394.

INDEC

- 2010 *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010*, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, referencia citada en páginas 377, 379.

JUÁREZ, PAULA

- 2015 «De la canilla comunitaria al desarrollo inclusivo sustentable. Aportes para la gestión de los recursos hídricos en Argentina», en *Ciencia e investigación*, vol. 65, n.º 3, págs. 69-83, referencia citada en páginas 381, 393.

KASPARIAN, DENISE

- 2020 *Lucha ¿sin patrón? La conflictividad de trabajo en empresas recuperadas y cooperativas del Programa Argentina Trabaja*, Buenos Aires: Teseo, referencia citada en página 390.

LARKIN, BRIAN

- 2013 «The politics and poetics of infrastructure», en *Annual Review of Anthropology*, n.º 42, págs. 327-343, referencia citada en páginas 372, 394.

LÓPEZ, EMILCE *et al.*

- 2018 «Accesibilidad al agua para consumo humano en la provincia de Salta-Argentina. Diseño de un indicador en entorno SIG», en *Revista Nodo*, vol. 12, n.º 24, págs. 32-45, referencia citada en página 380.

MERLINSKY, GABRIELA Y MELINA TOBIÁS

- 2020 «Pandemia, desigualdades ambientales y acceso al agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires», en *Revista Sociedad*, n.º 41, págs. 46-58, referencia citada en página 373.

SCHMIDT, MARIANA

- 2019 «(In)justicias ambientales, territoriales y sociosanitarias en el Chaco salteño, Argentina», en *Folia Histórica del Nordeste*, n.º 35, págs. 7-26, referencia citada en páginas 373, 378.
- 2022 «El cañito de la red llega, lo que no llega es el agua. Hacia una ecología política del agua en el Chaco salteño, Argentina», en *Territorios*, n.º 46, págs. 1-29, referencia citada en páginas 373, 378.

SCHMIDT, MARIANA *et al.*

- sin fecha «Conflictos por el agua y el uso de agroquímicos en Salta y Santiago del Estero, Argentina: un análisis desde la ecología política», en *Agua y Territorio*, n.º 21, en prensa, referencia citada en página 373.

SCHMIDT, MARIANA Y MELINA TOBIÁS

- 2021 «Infraestructuras de agua potable y desigualdades hídricas en áreas periurbanas y rurales del Chaco salteño, Argentina», en *Estudios Rurales*, vol. 11, n.º 24, referencia citada en páginas 373, 383, 393.

TECHO

- 2016 *Relevamiento de Asentamientos Informales*, Techo, referencia citada en página 376.

TOBIÁS, MELINA

- 2014 *La re-estatización del servicio de agua y saneamiento y la gobernabilidad del agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2012)*, Tesis de Magister, Universidad Nacional de San Martín, referencia citada en página 376.

TOBIÁS, MELINA *et al.*

- 2020 «Desigualdades en el acceso al agua y la salud en contextos de pandemia. El caso del Noroeste del Conurbano Bonaerense», en *Desigualdades en el marco de la pandemia. Reflexiones y desafíos*, comp. por Nora Goren y Guillermo Ferrón, Buenos Aires: UNPAZ, vol. 1, págs. 58-62, referencia citada en páginas 373, 393.

TOBÍAS, MELINA y LEONARDO FERNÁNDEZ

- 2019 «La circulación del agua en Buenos Aires. Resonancias geográficas y desigualdades socio-espaciales en el acceso al servicio», en *Cuadernos de Geografía*, vol. 28, n.º 2, págs. 423-441, referencia citada en página 377.

TOBÍAS, MELINA y SOLEDAD FERNÁNDEZ BOUZO

- 2022 «Social, Health, and Environmental Impacts of the Mandatory Lockdown in Underprivileged Neighbourhoods of Buenos Aires», en *Covid-19 and the Sociology of Risk and Uncertainty. Studies of Social Phenomena and Social Theory Across 6 Continents*, ed. por Patrick Brown y Jens Zinn, Palgrave Macmillan, págs. 85-114, referencia citada en páginas 373, 375.